

0.506  
CASACIÓN  
PENAL



SA: 425742/2011

*[Signature]*  
NADIA A. PÉREZ  
Secretaria de Cámara

REGISTRO NRO. 15.800 .4

//la ciudad de Buenos Aires, a los *once* (9) días del mes de *agosto* del año dos mil once, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Augusto M. Diez Ojeda como Presidente y por los doctores Mariano González Palazzo y Raúl R. Madueño como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora Nadia A. Pérez, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 88/113 vta. del presente incidente Nro. 11.784 del Registro de esta Sala, caratulada: “**CEMENTOS AVELLANEDA S.A. s/recurso de casación**”; de la que **RESULTA**:

I. Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en la causa nro. 54.419 de su Registro, decidió, con fecha 26 de agosto de 2008, por unanimidad “**I. RECHAZAR LOS PLANTEOS DE NULIDAD** efectuados por los representantes de **ASOCIACIÓN FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND, JUAN MINETTI S.A., LOMA NEGRA C.I.A.S.A. y CEMENTO SAN MARTÍN S.A., CEMENTOS AVELLANEDA S.A., Y PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.**”.

**II.- RECHAZAR LOS PLANTEOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL** efectuados por los representantes de **ASOCIACIÓN FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND, JUAN MINETTI S.A., LOMA NEGRA C.I.A.S.A. y CEMENTO SAN MARTÍN S.A., CEMENTOS AVELLANEDA S.A., Y PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.**

**III.- CONFIRMAR** lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

*[Signature]*  
**ES COPIA**

**IV.- CONFIRMAR** lo dispuesto por los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación en cuanto por aquéllos se impuso sanciones a LOMA NEGRA C.I.A.S.A., JUAN MINETTI S.A., CEMENTOS AVELLANEDA S.A., PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A., CEMENTO SAN MARTÍN S.A. y a ASOCIACIÓN FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND, respectivamente.

**V.- CONFIRMAR** el monto de la multa impuesta a la ASOCIACIÓN FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND por el artículo 9º de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

**VI.- CON COSTAS** (artículos 143, 144 y ccs., del C.P.M.P.).

*Y, por mayoría:*

**VII.- CONFIRMAR** el artículo 3º de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

**VIII.- CONFIRMAR** los montos de las multas impuestas a a LOMA NEGRA C.I.A.S.A., JUAN MINETTI S.A., CEMENTOS AVELLANEDA S.A. y CEMENTO SAN MARTÍN S.A. por los artículos 4º, 5º, 6º, y 8º, respectivamente, de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

**IX.- REDUCIR** el monto de la multa impuesta a PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. por el artículo 7º de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a la suma de \$ 6.000.000 (seis millones de pesos) ...” -confr. copia de la resolución obrante a fs. 38/87 vta.-.

II. Que contra dicho pronunciamiento, el abogado representante de la empresa, doctor Carlos E. Caride Fitte, junto con su letrado patrocinante, doctor Carlos Tombeur, interpusieron recurso de casación (fs. 88/113 vta.), el que denegado a fs. 2/6 vta. -conforme copia agregada al presente expediente- fue concedido por esta Sala tras la interposición de la vía directa correspondiente (Reg. Nro. 12.504, fs. 123/125 vta.).

III. Que los recurrentes encarrilaron sus agravios en ambos motivos casatorios previstos en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, y sustentaron la admisibilidad de la vía intentada por su adecuación en las previsiones de los artículos 457 y en el carácter de tribunal intermedio de esta Excma. Cámara Nacional de Casación Penal (conforme precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

En cuanto a los vicios *in indicando*, se focalizaron en: a) errónea interpretación de la ley 22.262, ya que los sentenciantes se apartaron de lo previsto en el artículo 43 de dicha norma que establece que son de aplicación supletoria las disposiciones del Libro I del C.P. y del C.P.P.N., al no resolver conforme el artículo 62 inc. 5° del código sustantivo; y b) errónea interpretación del artículo 2 del Código Penal pues, si el tribunal *a quo* entiende que el término de prescripción establecido por la ley 22.262 es de 6 años, entonces la ley penal más benigna resulta ser la ley 25.156 que en su artículo 54 dispone que las infracciones prescriben a los 5 años -amén de que suprimió las penas de prisión contenidas en los artículos 41 y 42 de aquella norma.

Como vicios *in procedendo* mencionaron: 1) arbitrario apartamiento de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues los sentenciantes no fundamentaron porqué no correspondía aplicar al caso de autos el precedente "YPF" (Fallos: 325:1702) de nuestro Máximo Tribunal, en el que se definió que el plazo de prescripción para las

infracciones previstas en la Ley de Defensa de la Competencia es de dos años; 2) arbitrariedad por omisión de pronunciamiento sobre cuestiones decisivas planteadas, particularmente, respecto al nuevo período investigado (julio 1981-agosto 1993), la imputación de una nueva conducta y la incorporación de la figura penal del artículo 41 de la norma *supra* mencionada.

Por último, alegaron vicios de fundamentación por prescindencia de prueba decisiva referente a: a) la participación de CASA en el mercado -que resulta mayor a la fijada en la sentencia-; b) arbitraria prescindencia del informe contable de CASA; c) CASA no participó en el Operativo Patagonia ni en un sistema de intercambio de información, ni en reuniones fuera de la AFCP, ni en el control de precios; d) prueba inválida no ratificada en sede judicial; y e) irrazonabilidad del monto de la multa impuesta -violación a normas de orden público (art. 7 de la ley 23.928)-.

Hicieron reserva del caso federal.

IV. Que, superada la etapa prevista por el art. 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano González Palazzo, Augusto M. Diez Ojeda y Raúl R. Madueño.

**Los señores jueces Mariano González Palazzo y Augusto M. Diez Ojeda dijeron:**

I. Toda vez que a fs. 123/125 vta. del presente incidente se ha determinado la admisibilidad del recurso impetrado, hemos de adentrarnos a dar a respuesta a las críticas introducidas por la defensa representada por el abogado representante de la empresa, doctor Carlos E. Caride Fitte, junto con su letrado patrocinante, doctor Carlos Tombeur

II. Sentado ello, corresponde señalar que las presentes actuaciones llegan a estudio de este tribunal a raíz del recurso interpuesto

por la defensa de la cementera "Cementos Avellaneda S.A." contra la multa que le fuera impuesta a través de la Resolución Nro. 124 dictada por el Secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, y confirmada por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por supuesta comisión de las figuras infraccionales tipificadas en los artículos 1, 26 y 41 de la ley nro. 22.262 de Defensa de la Competencia y, asimismo, contra el rechazo de los pedidos de prescripción de la acción emergente del correspondiente proceso administrativo.

En atención a ello, encontramos de aplicación en autos, respecto al régimen legal prescriptivo de la acción en el proceso de mención en virtud del sistema adoptado por el legislador en la ley 22.262, las conclusiones arribadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 325:1702, en cuanto sostiene, al hacer suyas las consideraciones expuestas por el Procurador General de la Nación, que *"...el régimen establecido en el art. 35 de la ley rige exclusivamente para los delitos que prevé el art. 41. En efecto, del texto legal se desprende que allí se han contemplado dos géneros de ilicitudes. Por un lado, infracciones (art. 1º) cuyo conocimiento corresponde a la administración (arts. 17 a 31) y que, en caso de sanción, dan lugar a que se impongan ciertas medidas (arts. 26 y 27). Por el otro, delitos (art. 41) cuyo juicio, previa sustanciación del sumario administrativo, corresponde al órgano jurisdiccional (arts. 32 a 42), los que son reprimidos con penas (art. 42).*

*Con este esquema como criterio rector, me parece claro que las expresiones contenidas en el citado art. 35 aluden a la prescripción de la acción respecto de los delitos y no de las infracciones administrativas, no sólo por la ubicación sistemática de la norma -en el capítulo III dedicado a los delitos-, y por su literalidad -referida únicamente a la acción penal-,*

ES COPIA

Olga Francisca Tonzo  
Dirección de Gestión

*sino también por la lógica del mecanismo incluido en ella por el legislador. Así, sólo en lo atinente a la acción que nace cuando se comete un hecho delictivo tiene sentido disponer que el término de la prescripción se interrumpa mientras se sustancie el necesario sumario administrativo previo y comience nuevamente a correr dieciocho meses después de iniciadas las actuaciones judiciales.*

*Entonces, a falta de un dispositivo expreso para la prescripción de la acción en lo referido a las infracciones, adquiere vigencia la aplicabilidad supletoria de las reglas del Libro I del Código Penal, al que remite el art. 43, ubicado en el capítulo IV, dedicado precisamente a las disposiciones complementarias. Por consiguiente, en mi concepto, el plazo para la prescripción de la acción en el caso de las infracciones se rige por los arts. 62, inc. 5º y concordantes del código de fondo... ”.*

De esta reseña se advierte que nuestro Máximo Tribunal le atribuyó carácter autónomo al cómputo de la prescripción de la acción emergente de los tipos infraccionales legislados en la norma bajo estudio, toda vez que al no contar la ley 22.262 con una regulación específica y expresa acerca del instituto de referencia -pues sólo establece el plazo de prescripción de la acción para el caso de los delitos contemplados en la misma-, nuestros colegas de la instancia superior entendieron aplicable el régimen general de prescripción de la acción previsto en el Código Penal (art. 62 y concordantes).

En razón de todo lo hasta aquí expuesto, consideramos que la doctrina de cita guarda analogía con los motivos que incitan a este tribunal en los presentes actuados y, atento a que se encuentra en juego la interpretación de normas federales, corresponde su aplicación, en virtud del carácter de último intérprete de la Constitución Nacional y normas de menor jerarquía, que reviste la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así las cosas, entendemos que los argumentos brindados por el

*a quo* en la decisión sujeta a revisión, no constituyen razones suficientes que permitan el apartamiento de la jurisprudencia de dicho tribunal, amén de referirse a los tipos penales contemplados en la ley 22.262, que no abarca el supuesto de autos que aún se encuentra en la instancia administrativa.

En efecto, la conclusión arribada por los magistrados de la Sala B de la C.N.A.P.E. evidencia un total desconocimiento acerca de que la obligatoriedad de la doctrina de los fallos del más Alto Tribunal sólo se encuentra condicionada a la existencia de nuevas consideraciones no analizadas en aquella oportunidad o al cambio de la interpretación de las normas en cuestión o, directamente, de la legislación -nada de lo cual se observa en autos-.

Por otro lado, en cuanto al aludido cambio de integración de la Procuración General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como fundamento supletorio utilizado por el tribunal *a quo* a fin de apartarse de la doctrina de mención, resulta insustancial pues, más allá de lo que explicáramos *ut supra*, la obligatoriedad del acatamiento de la jurisprudencia de la C.S.J.N. por parte de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía no tiene su génesis en las personas que suscriben las decisiones que emanan de dicha Corte, sino en el carácter de máximo tribunal que la misma reviste y, repetimos, en su función de último intérprete de la constitución (Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; 270:335; 307:1779; 312:2007).

En este entendimiento y, conforme ya lo adelantáramos al emitir nuestro voto en oportunidad de decidir la apertura de esta vía casatoria, la resolución impugnada consagra un inequívoco e infundado apartamiento de lo dispuesto por la C.S.J.N. en Fallos 325:1702, lo que constituye cuestión federal suficiente (Fallos: 312:396; 326:2347), no sólo para dar intervención a esta Excma. Cámara Nacional de Casación Penal, sino

también para descalificarla como acto jurisdiccional válido, destinándola a una solución de nulidad (art. 404, inc. 2º, C.P.P.N.).

Ello así, toda vez que, conforme lo tiene dicho nuestro Máximo Tribunal, *"...aún cuando las discrepancias de interpretación son contingencias normales en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, si existe una norma que impone a los jueces acatar la doctrina de la Corte Suprema [art. 19 de la ley 24.463], los magistrados sólo pueden apartarse de ella expresando motivos novedosos y variados que respalden las diferentes posiciones adoptadas en relación a las sustentadas por este Tribunal (Fallos: 212:51; 303:1769; 307:1094; 311:1644 y sus citas; 312:2007; 318:2060; 319:699, 2061 y 320:1660)..."* (confr. Fallos: 324:2379).

En efecto, *"...la doctrina del acatamiento establecida por la Corte no impone una pura y simple adhesión a su jurisprudencia, sino que su imperio se halla supeditado a la existencia de un caso cuyos hechos relevantes sean sustancialmente análogos a los del caso pendiente de decisión. En efecto, conforme la mentada doctrina, los jueces inferiores deben conformar sus decisiones a las conclusiones arribadas en las sentencias del Alto Tribunal, a menos que sustenten sus discrepancias en razones no examinadas o resueltas en ellas (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294, entre muchos otros). Y, para distinguir tales razones, es imprescindible analizar los precedentes de la Corte en función de la «singularidad del caso» (Fallos: 212:251), que llega conformado a la jurisdicción extraordinaria por un determinado supuesto de hecho, condicionado por la «ineludible variedad de las circunstancias de tiempo y lugar» (Fallos: 304:1459), y por las teorías o argumentos que fundamentan las decisiones tomadas en las instancias que la preceden y las posiciones asumidas por las partes en el proceso. Pues, sólo a partir del examen conjunto de esa multiplicidad de factores es posible determinar si*



existe «sustancial similitud» (Fallos: 307:240) con las cuestiones planteadas y resueltas por la Corte con anterioridad, para poder corroborar si existen «hechos diferentes a los examinados entonces» o «cuestiones legales nuevas que autoricen la revisión de aquella jurisprudencia» (Fallos: 231:447)... » (confr. voto del Dr. Diez Ojeda en fallos plenarios nro. 187, caratulado “Vallarruel, Sergio Sebastián s/recurso de inaplicabilidad de ley”, rto. el 24/02/10; y nro. 191, caratulado “Azpiazu, Juan Carlos s/recurso de inaplicabilidad de ley”, rto. el 08/03/10).

En síntesis, del análisis realizado de las constancias obrantes en los presentes actuados y la resolución puesta en crisis, sólo cabe concluir que existe, por parte de los sentenciantes, un palmario desconocimiento y total falta de acatamiento de lo dispuesto por la Corte Suprema en Fallos 325:1702, conforme fuera expresamente invocada por el apelante.

IV. Por todo lo expuesto, y en atención a la autoridad institucional que revisten los fallos de nuestro Máximo Tribunal, proponemos al acuerdo HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. 88/113 vta., sin costas, y, consecuentemente, ANULAR la resolución cuestionada y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que proceda a dictar una nueva resolución de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 2 de julio de 2002, *in re* “Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A s/ley 22.262 -Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Secretaría de Comercio e Industria” - Fallos: 325:1702 (arts. 471, 530 y 531 de C.P.P.N.).

Así votamos.

El señor juez Raúl R. Madueño dijo:

Que sellada como se encuentra la cuestión debatida en autos, e virtud de los votos que anteceden, me limitaré a mantener mi criterio e

cuanto a la ajenidad de esta Cámara Nacional de Casación Penal a tratar los recursos deducidos contra las sanciones administrativas -de carácter contravencional- impuestas por la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

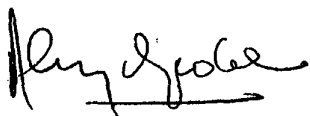
Por lo que corresponde rechazar el recurso de casación intentado, con costas.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría

**RESUELVE:**

**HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto a fs. 88/113 vta. por el abogado representante de la empresa, doctor Carlos E. Caride Fitte, junto con su letrado patrocinante, doctor Carlos Tombeur, sin costas, y consecuentemente **ANULAR** la resolución cuyas copias obran a fs. 38/87 vta. y **REMITIR** las presentes actuaciones a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, a fin de que proceda a dictar una nueva resolución de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 2 de julio de 2002, *in re* "Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ley 22.262 -Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Secretaría de Comercio e Industria" - Fallos: 325:1702 (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

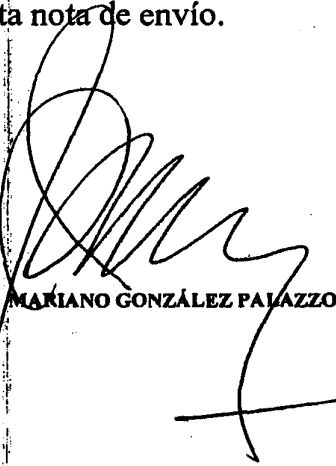
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, cúmplase con la remisión dispuesta, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.



AUGUSTO M. DIEZ OJEDA



RAÚL R. MADUEÑO



MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO

Ante mí:



NADIA A. PÉREZ  
Secretaría de Cámara

//la ciudad de Buenos Aires, a los *nove* (9) días del mes de *septiembre* del año dos mil once, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Augusto M. Diez Ojeda como Presidente y por los doctores Mariano González Palazzo y Raúl R. Madueño como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara doctora Nadia A. Pérez, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 100/122 del presente incidente Nro. 11.785 del Registro de esta Sala, caratulada: “**PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. s/recurso de casación**”; de la que **RESULTA**:

I. Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en la causa nro. 54.419 de su Registro, decidió, con fecha 26 de agosto de 2008, por unanimidad “**I. RECHAZAR LOS PLANTEOS DE NULIDAD** *efectuados por los representantes de ASOCIACIÓN FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND, JUAN MINETTI S.A., LOMA NEGRA C.I.A.S.A. y CEMENTO SAN MARTÍN S.A., CEMENTOS AVELLANEDA S.A., Y PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.*”

**II.- RECHAZAR LOS PLANTEOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL** *efectuados por los representantes de ASOCIACIÓN FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND, JUAN MINETTI S.A., LOMA NEGRA C.I.A.S.A. y CEMENTO SAN MARTÍN S.A., CEMENTOS AVELLANEDA S.A., Y PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.*

**III.- CONFIRMAR** *lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.*

**IV.- CONFIRMAR** *lo dispuesto por los artículos 4º, 5º, 6º, 7º,*

8° y 9° de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación en cuanto por aquéllos se impuso sanciones a LOMA NEGRA C.I.A.S.A., JUAN MINETTI S.A., CEMENTOS AVELLANEDA S.A., PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A., CEMENTO SAN MARTÍN S.A. y a ASOCIACIÓN FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND, respectivamente.

**V.- CONFIRMAR** el monto de la multa impuesta a la ASOCIACIÓN FABRICANTES DE CEMENTO PORTLAND por el artículo 9° de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

**VI.- CON COSTAS** (artículos 143, 144 y ccs., del C.P.M.P.).

*Y, por mayoría:*

**VII.- CONFIRMAR** el artículo 3° de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

**VIII.- CONFIRMAR** los montos de las multas impuestas a LOMA NEGRA C.I.A.S.A., JUAN MINETTI S.A., CEMENTOS AVELLANEDA S.A. y CEMENTO SAN MARTÍN S.A. por los artículos 4°, 5°, 6°, y 8°, respectivamente, de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

**IX.- REDUCIR** el monto de la multa impuesta a PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. por el artículo 7° de la Resolución SCT N° 124 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a la suma de \$ 6.000.000 (seis millones de pesos) ...” -confr. copia de la resolución obrante a fs. 49/99 vta.-.

II. Que contra dicho pronunciamiento, los letrados apoderados

de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., doctores Roberto H. Crouzel, Bernardo Cassagne, con el patrocinio letrado del doctor Diego Ignacio Richards, interpusieron recurso de casación (fs. 100/122), el que denegado a fs. 124/129 vta. -conforme copia agregada al presente expediente- fue concedido por esta Sala tras la interposición de la vía directa correspondiente (Reg. Nro. 12.502, fs. 139/142 vta.).

III. Que los recurrentes encarrilaron sus agravios en ambos motivos casatorios previstos en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, y sustentó la admisibilidad de la vía intentada por su adecuación en las previsiones de los artículos 457 y 459 inc. 2do. del mismo cuerpo normativo, y en el carácter de tribunal intermedio de esta Excm. Cámara Nacional de Casación Penal (conforme el precedente "Di Nuncio" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Sostuvieron que la ley aplicable es la 22.262, con fundamento en el artículo 58 de la ley 25.156, aclarando que en virtud de la sanción de esta última norma, se encuentran derogadas todas las disposiciones penales que contenga la primera ley mencionada. A su vez, señalaron que la ley 22.262 resulta ser la ley penal más benigna en orden a la infracción administrativa que se investiga, pues las sanciones en la nueva norma son más gravosas que las establecidas en aquella.

En cuanto a la prescripción de la acción, explicaron que los sentenciantes al entender aplicable el régimen previsto en el artículo 35 de la ley 22.262 de seis años, se apartaron del precedente de la CSJN (Fallos: 325:1702) que había invocado la propia defensa y por el cual se dispuso que el plazo de prescripción de la acción penal emergente de las infracciones administrativas que se establecen por el artículo 1 de la ley 22.262 es de dos años, siendo que en las disposiciones del artículo 35 del cuerpo normativo mencionado se hace referencia a la prescripción de la acción para perseguir

los delitos que se tipificaron por aquella ley. Por lo tanto, afirmaron que resulta aplicable el artículo 62 inc. 5to. del Código Penal, en consonancia con lo establecido por el artículo 43 de la ley 22.262, en cuanto prevé la aplicación supletoria de las disposiciones del Libro I del código sustantivo.

En consecuencia, teniendo presente que: a) la resolución dictada el 31 de agosto de 1999 dispuso promover la investigación que dio origen a la sanción impugnada, intimando a su mandante a presentar explicaciones en los términos del artículo 20 de la ley 22.262 -acto que podría considerarse analógicamente como una declaración indagatoria (acto interruptivo del curso de la prescripción, conforme artículo 67 inciso b) de la ley 25.990)-; b) la resolución de fecha 23 de agosto de 2004, a través de la cual se imputó a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. una supuesta infracción a la ley 22.262 y dispuso correr traslado en los términos del artículo 23 de la mencionada norma -lo que puede interpretarse como un requerimiento acusatorio del procedimiento penal: causal interruptiva de la acción (inciso c) del actual artículo 67 del C.P.); y c) el plazo de prescripción aplicable es el de dos años que dispone el artículo 62 inciso 5to. del C.P. para hechos reprimidos con pena de multa, concluyeron que la acción para la imposición de las sanciones administrativas previstas en la ley 22.262 ha prescrito con fecha 31 de agosto de 2001, ya que dentro del período referido no se ha verificado ningún acontecimiento con fuerza legal para interrumpir el curso de la prescripción.

Con relación al argumento del tribunal *a quo* de considerar que en virtud de la orden emanada de la autoridad de aplicación a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) de fecha 25 de julio de 2005, podría concluirse que las conductas investigadas se habrían extendido más allá del lapso definido, afirmaron su rechazo por violación de principios constitucionales y porque conforme el artículo 63 del C.P. que instituye que la prescripción de la acción penal comenzará a correr desde la medianoche

en que se cometió el delito o si éste fuera continuado, en que cesó de cometerse, para fundar la subsistencia de aquélla, requeriría la iniciación de un proceso distinto, con imputaciones claras y precisas, la posibilidad de ser oído, etc..

Por otro lado, sostuvieron que la decisión impugnada resulta nula por configurar un grosero apartamiento al procedimiento administrativo previsto por la ley 22.262, ya que se le imputó a la empresa que representan en los términos del art. 23 de la norma *supra* mencionada, sin antes haber cumplido con la etapa de "instrucción" que prevén los artículos 20 a 22 de aquélla.

Asimismo, señalaron que el tribunal *a quo* al apartarse de la circunstancia atenuante que determinó una disminución en la multa impuesta del 30% de su valor por el hecho de haber sido obligada a ingresar en el cartel, excedió su jurisdicción, pues la materia puesta a estudio de dicho órgano no incluía agravio alguno con relación al atenuante.

Explicaron que bajo la normativa de la ley nacional de Defensa de la Competencia no existen conductas o actos punibles *per se*, pues para que sean punibles resulta necesario que la autoridad administrativa acredite o pruebe suficientemente, a través del procedimiento legal, lo que no sucedió en autos, pues se invirtió la carga probatoria.

Agregaron que resulta desacertada la conclusión que arribaron los colegas de la Sala B de la CNAPE, en cuanto a que el mantenimiento del porcentaje de mercado (ventas) de "PCP" durante el lapso investigado fuera una evidencia de un acuerdo de reparto de cuotas y mercado, pues ello implica desconocer la situación fáctica de la empresa (ámbito geográfico específico en el que produce y comercializa sus productos y la conformación de su estructura funcional).

Calificaron de arbitraria la resolución recurrida respecto a la

afirmación que allí se hiciera acerca de la existencia del "Operativo Patagonia", la intervención de "PCR" en las supuestas reuniones mantenidas por los miembros del Cartel fuera de la AFCP, su participación en el alegado "intercambio de información sensible y anticompetitivo y el perjuicio al interés económico general derivado del imputado acuerdo de cuotas y reparto de mercado, pues no tiene sustento en prueba alguna y se omitió considerar las pruebas producidas por esta parte.

Por último, como planteo subsidiario a todos los agravios expuestos anteriormente, solicitaron la reducción de la multa impuesta, atento a que: a) el precio promedio ponderado para la determinación del beneficio ilícito es muy superior a aquel registrado por la empresa que representan; b) el apartamiento del *a quo* respecto del atenuante tenido en cuenta por la autoridad de aplicación para la aplicación de una disminución del 30% de la multa; y c) el argumento de la minoría expresado en el considerando 115 de la resolución impugnada.

Hicieron reserva del caso federal.

IV. Que superada la etapa prevista por el art. 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano González Palazzo, Augusto M. Diez Ojeda y Raúl R. Madueño.

**Los señores jueces Mariano González Palazzo y Augusto M. Diez Ojeda dijeron:**

I. Toda vez que a fs. 139/142 vta. del presente incidente se ha determinado la admisibilidad del recurso impetrado, hemos de adentrarnos a dar a respuesta a las críticas introducidas por la defensa representada por los letrados apoderados de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., doctores Roberto H. Crouzel, Bernardo Cassagne, con el patrocinio letrado del doctor Diego Ignacio Richards



 **NADIA A. PÉREZ**  
Secretaría de Cámara

II. Sentado ello, corresponde señalar que las presentes actuaciones llegan a estudio de este tribunal a raíz del recurso interpuesto por los letrados apoderados de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., doctores Roberto H. Crouzel, Bernardo Cassagne, con el patrocinio letrado del doctor Diego Ignacio Richards contra la multa que le fuera impuesta a través de la Resolución Nro. 124 dictada por el Secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, y confirmada por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por supuesta comisión de las figuras infraccionales tipificadas en los artículos 1, 26 y 41 de la ley nro. 22.262 de Defensa de la Competencia y, asimismo, contra el rechazo de los pedidos de prescripción de la acción emergente del correspondiente proceso administrativo.

En atención a ello, encontramos de aplicación en autos, respecto al régimen legal prescriptivo de la acción en el proceso de mención en virtud del sistema adoptado por el legislador en la ley 22.262, las conclusiones arribadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 325:1702, en cuanto sostiene, al hacer suyas las consideraciones expuestas por el Procurador General de la Nación, que *"...el régimen establecido en el art. 35 de la ley rige exclusivamente para los delitos que prevé el art. 41. En efecto, del texto legal se desprende que allí se han contemplado dos géneros de ilicitudes. Por un lado, infracciones (art. 1º) cuyo conocimiento corresponde a la administración (arts. 17 a 31) y que, en caso de sanción, dan lugar a que se impongan ciertas medidas (arts. 26 y 27). Por el otro, delitos (art. 41) cuyo juicio, previa sustanciación del sumario administrativo, corresponde al órgano jurisdiccional (arts. 32 a 42), los que son reprimidos con penas (art. 42).*

*Con este esquema como criterio rector, me parece claro que las expresiones contenidas en el citado art. 35 aluden a la prescripción de la*

**ES COPIA**  
  
Olga Francina T...

*acción respecto de los delitos y no de las infracciones administrativas, no sólo por la ubicación sistemática de la norma -en el capítulo III dedicado a los delitos-, y por su literalidad -referida únicamente a la acción penal-, sino también por la lógica del mecanismo incluido en ella por el legislador. Así, sólo en lo atinente a la acción que nace cuando se comete un hecho delictivo tiene sentido disponer que el término de la prescripción se interrumpa mientras se sustancie el necesario sumario administrativo previo y comience nuevamente a correr dieciocho meses después de iniciadas las actuaciones judiciales.*

*Entonces, a falta de un dispositivo expreso para la prescripción de la acción en lo referido a las infracciones, adquiere vigencia la aplicabilidad supletoria de las reglas del Libro I del Código Penal, al que remite el art. 43, ubicado en el capítulo IV, dedicado precisamente a las disposiciones complementarias. Por consiguiente, en mi concepto, el plazo para la prescripción de la acción en el caso de las infracciones se rige por los arts. 62, inc. 5° y concordantes del código de fondo... ”.*

De esta reseña se advierte que nuestro Máximo Tribunal le atribuyó carácter autónomo al cómputo de la prescripción de la acción emergente de los tipos infraccionales legislados en la norma bajo estudio, toda vez que al no contar la ley 22.262 con una regulación específica y expresa acerca del instituto de referencia -pues sólo establece el plazo de prescripción de la acción para el caso de los delitos contemplados en la misma-, nuestros colegas de la instancia superior entendieron aplicable el régimen general de prescripción de la acción previsto en el Código Penal (art. 62 y concordantes).

En razón de todo lo hasta aquí expuesto, consideramos que la doctrina de cita guarda analogía con los motivos que incitan a este tribunal en los presentes actuados y, atento a que se encuentra en juego la interpretación de normas federales, corresponde su aplicación, en virtud del

carácter de último intérprete de la Constitución Nacional y normas de menor jerarquía, que reviste la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así las cosas, entendemos que los argumentos brindados por el *a quo* en la decisión sujeta a revisión, no constituyen razones suficientes que permitan el apartamiento de la jurisprudencia de dicho tribunal, amén de referirse a los tipos penales contemplados en la ley 22.262, que no abarca el supuesto de autos que aún se encuentra en la instancia administrativa.

En efecto, la conclusión arribada por los magistrados de la Sala B de la C.N.A.P.E. evidencia un total desconocimiento acerca de que la obligatoriedad de la doctrina de los fallos del más Alto Tribunal sólo se encuentra condicionada a la existencia de nuevas consideraciones no analizadas en aquella oportunidad o al cambio de la interpretación de las normas en cuestión o, directamente, de la legislación -nada de lo cual se observa en autos-.

Por otro lado, en cuanto al aludido cambio de integración de la Procuración General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como fundamento supletorio utilizado por el tribunal *a quo* a fin de apartarse de la doctrina de mención, resulta insustancial pues, más allá de lo que explicáramos *ut supra*, la obligatoriedad del acatamiento de la jurisprudencia de la C.S.J.N. por parte de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía no tiene su génesis en las personas que suscriben las decisiones que emanan de dicha Corte, sino en el carácter de máximo tribunal que la misma reviste y, repetimos, en su función de último intérprete de la constitución (Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; 270:335; 307:1779; 312:2007).

En este entendimiento y, conforme ya lo adelantáramos al emitir nuestro voto en oportunidad de decidir la apertura de esta vía casatoria, la resolución impugnada consagra un inequívoco e infundado apartamiento de

lo dispuesto por la C.S.J.N. en Fallos 325:1702, lo que constituye cuestión federal suficiente (Fallos: 312:396; 326:2347), no sólo para dar intervención a esta Excma. Cámara Nacional de Casación Penal, sino también para descalificarla como acto jurisdiccional válido, destinándola a una solución de nulidad (art. 404, inc. 2º, C.P.P.N.).

Ello así, toda vez que, conforme lo tiene dicho nuestro Máximo Tribunal, *"...aún cuando las discrepancias de interpretación son contingencias normales en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, si existe una norma que impone a los jueces acatar la doctrina de la Corte Suprema [art. 19 de la ley 24.463], los magistrados sólo pueden apartarse de ella expresando motivos novedosos y variados que respalden las diferentes posiciones adoptadas en relación a las sustentadas por este Tribunal (Fallos: 212:51; 303:1769; 307:1094; 311:1644 y sus citas; 312:2007; 318:2060; 319:699, 2061 y 320:1660)..."* (confr. Fallos: 324:2379).

En efecto, *"...la doctrina del acatamiento establecida por la Corte no impone una pura y simple adhesión a su jurisprudencia, sino que su imperio se halla supeditado a la existencia de un caso cuyos hechos relevantes sean sustancialmente análogos a los del caso pendiente de decisión. En efecto, conforme la mentada doctrina, los jueces inferiores deben conformar sus decisiones a las conclusiones arribadas en las sentencias del Alto Tribunal, a menos que sustenten sus discrepancias en razones no examinadas o resueltas en ellas (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294, entre muchos otros). Y, para distinguir tales razones, es imprescindible analizar los precedentes de la Corte en función de la «singularidad del caso» (Fallos: 212:251), que llega conformado a la jurisdicción extraordinaria por un determinado supuesto de hecho, condicionado por la «ineludible variedad de las circunstancias de tiempo y lugar» (Fallos: 304:1459), y por las teorías o argumentos que*

*fundamentan las decisiones tomadas en las instancias que la preceden y las posiciones asumidas por las partes en el proceso. Pues, sólo a partir del examen conjunto de esa multiplicidad de factores es posible determinar si existe «sustancial similitud» (Fallos: 307:240) con las cuestiones planteadas y resueltas por la Corte con anterioridad, para poder corroborar si existen «hechos diferentes a los examinados entonces» o «cuestiones legales nuevas que autoricen la revisión de aquella jurisprudencia» (Fallos: 231:447)...» (confr. voto del Dr. Diez Ojeda en fallos plenarios nro. 187, caratulado “Vallarruel, Sergio Sebastián s/recurso de inaplicabilidad de ley”, rto. el 24/02/10; y nro. 191, caratulado “Azpiazu, Juan Carlos s/recurso de inaplicabilidad de ley”, rto. el 08/03/10).*

En síntesis, del análisis realizado de las constancias obrantes en los presentes actuados y la resolución puesta en crisis, sólo cabe concluir que existe, por parte de los sentenciantes, un palmario desconocimiento y total falta de acatamiento de lo dispuesto por la Corte Suprema en Fallos 325:1702, conforme fuera expresamente invocada por el apelante.

IV. Por todo lo expuesto, y en atención a la autoridad institucional que revisten los fallos de nuestro Máximo Tribunal, proponemos al acuerdo HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. 100/122, sin costas, y, consecuentemente, ANULAR la resolución cuestionada y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que proceda a dictar una nueva resolución de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 2 de julio de 2002, *in re* “Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ley 22.262 -Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Secretaría de Comercio e Industria” - Fallos: 325:1702 (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Así votamos.

Con.....las.....hojas. que corren  
como folios n°.....del mismo

El señor juez Raúl R. Madueño dijo:

Que sellada como se encuentra la cuestión debatida en autos, en virtud de los votos que anteceden, me limitaré a mantener mi criterio en cuanto a la ajenidad de esta Cámara Nacional de Casación Penal a tratar los recursos deducidos contra las sanciones administrativas -de carácter contravencional- impuestas por la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

Por lo que corresponde rechazar el recurso de casación intentado, con costas.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría

**RESUELVE:**

**HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto a fs. 100/122 por los letrados apoderados de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., doctores Roberto H. Crouzel, Bernardo Cassagne, con el patrocinio letrado del doctor Diego Ignacio Richards, sin costas, y consecuentemente **ANULAR** la resolución cuyas copias obran a fs. 49/99 vta. y **REMITIR** las presentes actuaciones a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, a fin de que proceda a dictar una nueva resolución de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 2 de julio de 2002, *in re* "Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ley 22.262 -Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Secretaría de Comercio e Industria" - Fallos: 325:1702 (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, cúmplase con la remisión dispuesta, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

AUGUSTO M. DIEZ OJEDA

RAÚL R. MADUENO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL JURÍDICO	
ENTRÓ	SALÍÓ
21 OCT 2011	